

Seguridizar, reprimir, pacificar: una crítica de las nuevas guerras en América Latina¹

John Gledhill

Universidad de Manchester, Reino Unido

Resumen

Este trabajo indaga sobre aspectos contradictorios de políticas de seguridad pública en Brasil y México, en base al estudio del proceso de “pacificación” de asentamientos irregulares en ciudades brasileñas, y de campañas contra el crimen organizado en el estado de Michoacán. Entre los temas abordados son las consecuencias del uso de fuerza represiva, la formación de grupos armados no oficiales, el papel de intereses privados en el contexto neoliberal, y la subjetividad de los actores. El análisis sugiere que el raíz de los problemas en los dos contextos no es la ausencia del estado sino la naturaleza de su presencia.

En este trabajo, indago sobre algunos de las contradicciones que caracterizan las actuales políticas de seguridad pública en Brasil y México. No quiero negar las diferencias de contexto político y económico en los dos países. Sin embargo, creo que hay rasgos comunes que vale la pena destacar, los cuales surgen de la lógica del proceso de *seguridización* de los problemas provocados por las desigualdades sociales.

Por un lado, los rasgos comunes tienen que ver con la forma en que se traduce cuestiones sociales, arraigadas en las estructuras de desigualdad sociales y étnicas, en problemas de seguridad nacional, aplicando el lenguaje de contrainsurgencia para legitimar una estrategia de represión que tiene distintos matices, motivos y además, efectos no previstos. Sin embargo, aunque algunos de estos efectos sean aparentemente negativos desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto,

¹ Las investigaciones en las que se basa este trabajo forma parte de un proyecto más amplio titulado “¿Seguridad para todos en la era de la securidización?”, llevado a cabo con la ayuda de una beca de investigación de The Leverhulme Trust, en el marco de su programa de “Major Research Fellowships”. Agradezco el generoso apoyo de la Fundación Leverhulme, enfatizando al mismo tiempo que solo yo soy el responsable de los argumentos planteados.

pueden ser “productivos”, en el sentido foucaultiano, desde el punto de vista de varios grupos de poder. Por otro lado, los rasgos comunes tienen que ver con la construcción de ciertos tipos de poblaciones como una amenaza a la seguridad de la sociedad en su conjunto, es decir como “sospechos” (Stephen, 1999), simplemente en base a la posición subalterna que ocupan dentro de la estructura global. En términos de los retos de la diversidad, dichas construcciones se descansan en el racismo y otros tipos de discriminaciones no superados por las políticas multiculturales neoliberales. Además, se expresan abiertamente, aunque a menudo de una manera que a primera vista puede parecer paradójica, en las prácticas cotidianas de los agentes de seguridad pública. Por lo tanto, será necesario indagar sobre la relación entre estructuras de poder social y la formación de las subjetividades de los actores involucrados en la manutención del orden público.

La “pacificación” de la periferia urbana brasileña

Mi primer ejemplo es la política de “unidades de policía pacificadoras” (UPPs) que se ha desarrollado como una pretendida “solución” al control territorial ejercido por el narcotráfico en los barrios pobres de las ciudades metropolitanas de Rio de Janeiro y Salvador, Bahía. En Bahía estas unidades tienen otro nombre oficial, “Bases Comunitarias de Seguridad”, aunque la gente de los barrios suele usar el nombre carioca, refiriéndose a UPPs. Tanto en Brasil como en México, ya es común hablar de la violencia asociada con el narcotráfico como una “guerra”, y a veces, utilizando el lenguaje de la Guerra Fría, referirse a las operaciones de las corporaciones policíacas como si fueran operaciones de combate a una “insurgencia”. Según su discurso oficial, por medio de las UPPs el estado pretende “reconquistar” espacios territoriales perdidos a los delincuentes para devolver a sus moradores sus plenos derechos de ciudadanía. Sin embargo, subyacente a este discurso oficial, hay otro, la idea de que las situaciones en áreas de marginación social amenazan la seguridad de todos los otros residentes urbanos, es decir, la lógica de la securidización de la desigualdad social.

La meta oficial de las políticas de “pacificación” de los barrios socialmente periféricos es la de implantar una policía comunitaria permanente dentro de las

comunidades pobres y de ligar la manutención del orden a la entrega de servicios y proyectos de desarrollo social. Se pretende, primero, transformar radicalmente las relaciones cotidianas entre policías y moradores, creando “una policía de proximidad social”. Segundo, se pretende apoyar la movilidad social de estas poblaciones, que de hecho siguen siendo más socialmente heterogéneas que el antiguo concepto de “marginalidad” reconocía (Perlman, 2004; Hita y Gledhill, 2010). Pueden ser incluidas en este modelo propuestas de conseguir el desarrollo social en los barrios periféricos por medio del fortalecimiento de la “economía solidaria” (Da Costa y Castilho, 2011).

Por lo tanto, al principio las nuevas políticas fueron elogiadas por una amplia gama de comentaristas, y pese a un escepticismo inicial, también conquistaron un grado de aceptación por parte de los moradores en algunos de los primeros barrios en donde UPPs fueron instaladas en Rio de Janeiro, barrios no por casualidad distinguidos por su tamaño relativamente pequeño (Veira da Cunha, 2012). Sin embargo, a esta altura del campeonato, el brillo de las UPPs ha sido seriamente ofuscado por una serie de acontecimientos. Los escándalos han incluido casos de sobornos pagados a los funcionarios de las UPPs por los traficantes, algo que nos hace acordarnos de la situación que se dio después del recurso a tácticas represivas en épocas anteriores. Una vuelta a políticas represivas en 1994, después de la salida de la gobernatura de Rio de Janeiro del populista Leonel Brizola, aumentó las oportunidades de la policía para hacer negocio con drogas decomisadas en otros lugares, armas de fuego, y extorsión de propinas para que las personas detenidas pudieran quedarse en libertad. Como señaló Michel Misse (1997; 2011), los “lazos peligrosos” entre “mercados de bienes económicos ilegales” y “mercancías políticas”, se fortalecieron no solamente por la corrupción policiaca, sino también por el interés de los políticos cariocas en conseguir los votos de los moradores de las favelas por medio de relaciones disfrazados con los líderes del tráfico, mediadas tanto por líderes comunitarias controlados por ellos como por policías corrompidas.

A la luz de las redes que ligan criminales con policías, líderes cívicos y políticos en el caso de las favelas de Rio de Janeiro, Arias (2006) ha rechazado una de las suposiciones principales de la política de seguridad pública actual, la que ofrece

un diagnóstico del problema de violencia dentro de los asentamientos irregulares que se llaman favelas en Rio de Janeiro² en base a la formación de sistemas de poder paralelo en su interior que escapan del control político. Además, las mismas funciones políticas pueden ser cumplidas por las milicias que sustituyeron a los traficantes en algunos barrios (Zaluar y Conceição, 2007). Patrocinadas por políticos locales, y disfrutando de un grado de impunidad que tiene una estrecha relación con la participación de policías y ex policías, según el equipo de investigación de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro dirigido por Alba Zaluar, las milicias siguen practicando una extorsión generalizada de la población de 45% de las favelas de Rio de Janeiro (mayor que la proporción de favelas controlada por narcotraficantes) pese a campañas en su contra.³ Las milicias tienen las características de una mafia, cobrando por servicios de “protección” y aprovechándose del cobro de “peajes” en las ventas de bienes y servicios como televisión por cable y el gas. Últimamente han extendido sus actividades ilícitas dentro de las viviendas populares construidas fuera de las favelas por el programa federal *Minha Casa, Minha Vida*. Por lo tanto, por si acaso el estado consiguiera expulsar a los traficantes de las favelas, el problema básico señalado por Misse y Arias podría reproducirse por medio de las milicias.

Las UPPs han tenido un éxito innegable en lo que se refiere a la reducción de tasas de homicidio en Rio de Janeiro. Sin embargo, aunque la instalación de las UPPs ha provocado un grado de migración del crimen a otras zonas, y tanto en Salvador, Bahia, como en Rio de Janeiro, los índices de otros tipos de actividades delictivas (robos y asaltos) siguen en aumento, en general los traficantes no han sido totalmente expulsados de los grandes complejos de barrios periféricos de Rio de Janeiro en donde UPPs han sido instaladas. Las UPPs todavía existen solamente en una minoría de las favelas de la ciudad, cuya selección demuestra una relación obvia con su proximidad a las zonas que serán frecuentadas por turistas durante la Copa Mundial

² No se suele usar la palabra “favela” en otras ciudades, sino otros términos tales como “periferia” o “invasiones”, aunque ninguno de estos términos debe ser entendido en un sentido netamente espacial: la “periferia” a veces solamente tiene un sentido social. En el caso de Rio de Janeiro, como veremos más adelante, es de suma importancia que hay favelas en las partes más “nobles” de la ciudad, algunas ubicadas en los cerros con vistas espectaculares del mar y las playas, pero las invasiones en Salvador también se encuentran en muchas zonas de la ciudad, incluso en zonas de alto valor inmobiliario.

³ Periodico *O Globo*, 3/12/2013, <http://glo.bo/IDiOQL>, acceso 4/12/2013.

del Fútbol y las Olimpiadas. Irónicamente, ya que los traficantes veían la llegada de los visitantes durante estos megaeventos deportivos como una oportunidad comercial sin precedentes para ellos, parece que después del trastorno inicial provocado por las ocupaciones de las favelas por policías de choque, a menudo con el apoyo del ejército, algunos se animaron a resistir más por este motivo. Aunque en general los traficantes han sido obligados a operar más discretamente en las márgenes, siguen provocando enfrentamientos, a veces aprovechándose de la desconformidad de muchos moradores tanto con la lentitud de la entrega de beneficios sociales como con la falta de transformaciones profundas en la relación cotidiana entre moradores y policías. Sin embargo, no se puede explicar todo en base al manipuleo de moradores por el narcotráfico.

La falta de transformación en el sistema de seguridad pública desde el punto de vista de los moradores de las favelas se mostró de una manera espectacular en Rio de Janeiro por el caso del secuestro, tortura y asesinato de Amarildo de Souza, un albañil no ligado al tráfico, por parte de policías de la UPP de la enorme favela de Rocinha. En este caso, la comandancia de la UPP hizo todo lo posible para encubrir el crimen, inclusive apagando las cámaras de vigilancia en la favela. Aunque los oficiales y soldados responsables fueron detenidos y la postura oficial es que el caso fue un acontecimiento lamentable pero aislado, esta postura no es cierta. Nuevas denuncias y protestas siguen aconteciendo en Rio de Janeiro. Mis propios datos etnográficos sobre la experiencia de la “UPP bahiana” en Salvador también sustentan el hipótesis de que se trata de problemas estructurales en lugar del efecto residual de algunas “manzanas podridas” que siguen reproduciendo los malos costumbres del antiguo regimen policiaco y contaminando al nuevo. Pero primero quiero discutir una perspectiva teórica que a primera vista podría hacer estos tipos de acontecimientos más previsibles. Me refiero al modelo del estado penal o “sociedad de control” planteado por Loïc Wacquant (2009), cuyas ideas han recibido buena acogida por parte de criminólogos críticos brasileños (Batista, coord. 2012).

Según Wacquant el “estado penal” está estrechamente ligado con el neoliberalismo, visto simultáneamente como un modelo económico y un modo de “gobernar” que tiene una “mano izquierda” (femenina), orientada a las intervenciones

sociales que pretenden aliviar las consecuencias sociales de la precariedad económica, y “una mano derecha” (masculina) dedicada a castigar y disciplinar a los pobres. Las ideas de Wacquant sobre la naturaleza de la “sociedad de control” neoliberal fácilmente se prestan al desarrollo de una interpretación crítica de la política de “pacificación” de las favelas de Rio de Janeiro y Bahía.

Sin embargo, tomando en cuenta las diferencias históricas entre Brasil, los Estados Unidos de Norte América y Francia, existen contradicciones adicionales provocadas por la creciente “privatización” del poder público que el modelo de Wacquant no consigue captar, debido a su énfasis sobre luchas “burocráticas” dentro del estado neoliberal. Wacquant describe el estado neoliberal como un “Leviatán” a pesar de reconocer su fragmentación “interna”, y se preocupa menos por la permeabilidad de las instituciones del estado a intereses privados, incluso intereses que actúan fuera de la ley. El hecho de que las actuales políticas contra la “inseguridad social” ya disfrutan, mundialmente, del apoyo tanto de políticos de la centro-izquierda electoral como de la derecha no garantiza su coherencia. Además, la relevancia del poder privado a la situación que los moradores de los barrios periféricos brasileños enfrentan en la actualidad se presta a otra interpretación, en base a la naturaleza de los modelos de acumulación de la “ciudad neoliberal”, ya que los grandes intereses inmobiliarios se han convertido en el eje central de la economía urbana (Smith, 2002) y disfrutan de una influencia importante en el financiamiento tanto de los partidos políticos de la centro-izquierda como de los de la derecha.

En muchos casos, los asentamientos irregulares ocupan espacios hoy en día codiciados por los intereses inmobiliarios. A la misma vez, el hecho de que los agentes de la policía militar brasileña se ven obligados a complementar sus salarios por medio de alquilar sus servicios a particulares en sus horas de descanso aumenta el problema provocado por el hecho de que bastantes agentes jubilados trabajan en cuerpos de seguridad privados, a menudo clandestinos, manteniendo su capacidad de actuar con impunidad en virtud de los contactos que conservan dentro de la policía oficial. Los salarios raquíuticos y oportunidades limitadas para ascender desde el rango de “soldado” a los rangos más altos de oficiales dentro de la policía militar producen

una situación en que intereses privados pueden apropiarse de los servicios de guardianes del orden público militarizados por fines particulares.

La UPP en Bahía: una perspectiva etnográfica

En el caso de Salvador, la seriedad de este problema se manifestó durante una huelga de una parte de la policía militar en febrero de 2012, provocada por la falta de respuesta del gobernador Jacques Wagner, del Partido de los Trabajadores, a sus reivindicaciones en torno a salarios y la estructura de la carrera.⁴ En este momento fue políticamente conveniente que el gobierno del estado de Bahía difundiera datos sobre muertos causados por agentes de seguridad clandestinos, y indicadores de la probable participación de policías en servicio en dichas organizaciones, así reconociendo la continuidad de las actividades de grupos de exterminio que ya habían operado por muchos años, pese a haber hecho poco para reactivar el departamento especial de la policía dedicado a este tema, que había sufrido un severo recorte de personal en 2007 (Noronha, 2008). Este tipo de problemas también se manifestaron de una manera dramática en el gran barrio periférico de 60,000 moradores donde yo he trabajado en Salvador. Formado por una invasión de paracaidistas en los años ochenta, Barrio de la Paz ya ocupa un lugar estratégico en el principal eje de desarrollo de la ciudad neoliberal (Hita y Gledhill, 2010). Hoy en día rodeado por condominios ocupados por familias de la clase media alta y con nuevas construcciones de este tipo llegando a sus linderos, algunas familias asentadas en las orillas del barrio fueron desalojadas bajo amenazas por parte de los agentes de seguridad de la empresa constructora. En seguida otros moradores fueron amenazados cuando intentaron parar el desmonte por los mismos actores de un terreno pegado al barrio cuya propiedad estaba siendo disputaba entre dos empresarios, uno de los cuales pretendía traspasarlo a la comunidad para la construcción de un centro deportivo. Todo el mundo se asustó

⁴ Los huelguistas eran miembros de la Asociación de Policía, Bomberos y de sus Familiares del Estado de Bahia (ASPRA). Aunque este gremio no aglutina a toda la policía militar, disfrutaban de cierto grado de simpatía manifiesta no solamente por parte de colegas que no participaron en la huelga, y por integrantes de la policía civil, sino también por militares del ejército mandados para garantizar el orden y proteger el edificio del congreso del estado, ocupado por los huelguistas (técnicamente culpables de un motín simplemente por estar en huelga, debido a la estructura paramilitar de la corporación). Aunque el gobernador adoptó una línea dura durante la huelga, ofreció concesiones en 2014, aunque fueron consideradas inadecuadas por la ASPRA, cuyo líder original milita en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el opositor principal del gobierno petista a nivel nacional.

cuando su benefactor cayó en una trampa preparada por sus enemigos y fue asesinado, junto con su hijo, un estudiante que no tenía nada que ver con el negocio de su papá, en su carro frente al terreno disputado.

La mayoría de los moradores del Barrio de la Paz son afro-descendientes. Como también es el caso en las favelas de Rio de Janeiro, sus fenotipos de hecho son variables, consecuencia del alto grado de mestizaje de la población brasileña y la llegada a la ciudad de más migrantes de las zonas serranas del interior en las últimas cuatro décadas, pero los estudios realizados sobre este tema apoyan las aseveraciones de los moradores que es más probable que jóvenes de fenotipo más negro serán blancos de violencia policiaca (Machado y Noronha, 2002), incluso ejecuciones extrajudiciales.⁵ Sin embargo, en la sociedad brasileña la pobreza “ennegrece” simbólicamente a todos. En este sentido, la suposición de la seguridización de la pobreza, es decir, que los moradores de los barrios pobres presentan una amenaza a la seguridad cotidiana de los ciudadanos que radican en el resto de la ciudad tiene un aspecto irónico. Aunque la mayoría de los integrantes de estas supuestas “clases peligrosas” está obligada a salir de sus barrios para trabajar, muchos todavía tienen pocas ganas pasearse en la ciudad en sus horas de descanso por temor de ser blancos de discriminación social o agresiones policiacas (Sheriff, 1999). En el caso del Barrio de la Paz, si nos enfocamos en las preocupaciones de los mismos moradores en torno a su propio sentido de inseguridad, este tipo de problemas son importantes, a pesar de compartir las preocupaciones de otros ciudadanos con respecto a la violencia ligada al narcotráfico, robos, asaltos, y violaciones de mujeres, problemas que castigan menos a los ciudadanos más acomodados que pueden mejorar su propia seguridad, por lo menos hasta cierto punto, comprando servicios privados y viviendo dentro de condominios cerrados. Además, ya que los moradores del Barrio de la Paz no tienen propiedad plena del terreno en que están asentados, se preocupan mucho por cualquier tipo de intervención que podría llevar al desalojo de una parte de esta población inconveniente, no solamente el tipo de violencia no oficial que acabé de mencionar, sino también las implicaciones de la política de pacificación, incluso los procesos de

⁵ A veces, según moradores del Barrio de la Paz, la respuesta policiaca a denuncias hechas por personas anónimas en estas comunidades ha sido matar a la primera persona o personas “convenientes” para dar una lección a la comunidad en general.

“regularización” oficial de la tenencia de la tierra y la aplicación de leyes contra la construcción de viviendas en “zonas de riesgo” ambientales.

Las acciones de la UPP que fue instalada en este barrio en septiembre de 2012 provocan preguntas adicionales sobre la lógica de las políticas de pacificación. El pretexto inmediato para instalar una UPP es el de reducir el nivel de violencia. En Bairro da Paz, la tasa de homicidios no había sido muy elevado en los últimos años. La razón fue, irónicamente, que los mismos traficantes habían conseguido imponer una suerte de orden en la comunidad, después del retiro de un puesto policial anterior cuyos integrantes habían sido el blanco de muchas quejas por su trato “incivilizado” y racista de la población.⁶ Es cierto que durante el año anterior de la instalación de la UPP, una guerra para controlar el tráfico había estallado en el barrio, aunque también irónicamente, había terminado antes de la llegada de la fuerza “pacificadora” (y tal vez fuera provocada por los trastornos de las redes del tráfico producidos por los previos pasos de la pacificación en otros lugares). Sin embargo, por causa de esta violencia reciente, muchos moradores ya estuvieron dispuestos a ver si la UPP pudiera ofrecer algo de alivio, pese al hecho de que el temor de los traficantes inhibió expresiones públicas a favor del proyecto.

La decepción no tardó en llegar. Durante la ocupación inicial del barrio, los policiales trataron a toda la población como “sospechosos” y violaron sus derechos en múltiples dimensiones. Entraron la comunidad con una postura “truculenta”, una queja replicada con cada vez mayor fuerza en Rio de Janeiro. La instalación de la UPP no mejoró la seguridad de los moradores. Una violación seguida por muerte quedó impune hasta los mismos moradores lincharon al presunto responsable. La policía de la UPP dio la vista gorda a este acontecimiento, pero, según moradores del barrio, hubo más muertos, aunque no fueron registrados oficialmente, tal vez porque la policía estaba recibiendo gratificaciones por sus logros en términos de reducción de homicidios. El grupo de traficantes que mandaban en el Barrio de la Paz antes de la guerra había intentando replicar el modelo de la organización criminal que ha logrado

⁶ Antes de la llegada del puesto policial, el barrio había sido dominado por una milicia, que hizo una “limpia” del barrio a petición de sus comerciantes, pero en seguida el grupo de milicianos se metió a la extorsión generalizada, provocando una campaña exitosa para su desarticulación por parte de una comunidad cuya resistencia al desalojo había fortalecido un importante grado de organización colectiva, que sigue reproduciéndose, pese a altibajos, hasta hoy.

dominar casi toda la periferia urbana de São Paulo, el Primero Comando de la Capital (PCC).⁷ Uno de los efectos más notables del “orden del crimen” establecido en São Paulo fue la substitución de linchamientos por un sistema de justicia “deliberativo” en el cual los moradores podrían tener mayor confianza que el sistema de justicia oficial, fatalmente parcial en términos de sesgos de clase social, pero de cierta manera ofreciendo una versión mimética de sus procedimientos (Feltran, 2010). Por lo tanto, Feltran plantea que el PCC hizo una aportación importante a la reducción de la tasa de homicidios en esta metrópoli. Sin embargo, el problema principal en el Barrio de la Paz fue la falta de cambio en la relación policía-moradores. La policía seguía agarrando a jóvenes en la calle y tratándoles de una manera verbalmente y físicamente abusiva. Frente a las quejas, el joven comandante sugirió que los moradores deben asistir a clases para aprender como reaccionar en estas situaciones, pidiendo a la gente que se haga una denuncia contra cualquier funcionario que se comportara de una manera incorrecta.

Algunos meses después, el hermano de la mujer violada y asesinada fue sujeto a un “abordaje” por policías de la UPP en la calle y llevado adentro de su base, donde lo golpearon. Hizo una denuncia. Después, según denuncias hechas por moradores, otro muchacho fue asesinado por personas enmascaradas que llegaron en un carro sin placas que había parado algunos minutos frente al cuartel de la UPP. Cuando los asesinos comenzaron a tirar balazos al grupo con que el muchacho estaba festejando en un bar, los agentes de la UPP quedaron parados en su base pese a pedidos de ayuda por parte de moradores. Vino una patrulla de las Rondas Especiales, pero estas policías llegando desde afuera negaron socorro al víctima y recogieron las balas, algo que normalmente indica que el crimen ha sido cometido por la misma policía. Las cámaras de vigilancia de la UPP fueron apagadas en el momento del acontecimiento, igual que en Rocinha. La hipótesis de los moradores es que el joven fue asesinado por la policía, pero por equivocación de identidad, ya que parecía mucho al otro joven que

⁷ El PCC, cuyos líderes mandan desde las cárceles que controlan, ya está extendiendo su influencia a otros estados, usando técnicas de construir redes y modelos de organización interna que tienen algo en común con la mafia italiana. Su hegemonía en São Paulo ha sido pactada en varias ocasiones con el estado y la policía, aunque el rompimiento de las reglas de estos pactos, junto con la extorsión de familiares de los líderes del PCC por elementos de la policía, ha provocado dos estallidos de violencia en años recientes, 2006, y 2012, durante los cuales las represalias extrajudiciales de la policía fueron desproporcionadas (Delgado, Dodge y Carvalho, 2011; Leblon, 2012)

hizo la denuncia. Aunque este incidente sembró miedo en la comunidad, los moradores siguen haciendo denuncias. La más reciente alega que un grupo de jóvenes fueron no solamente torturados sino también obligados a tener relaciones sexuales entre ellos por policías de la UPP.

Este último tipo de prácticas humillan a las víctimas y permiten a los “guardianes del orden” afirmar su superioridad jerárquica. Sin embargo, a primera vista, la “truculencia” de la policía en las comunidades pobres bahianos parece paradójica en el sentido de que los oficiales en su mayoría son ellos mismos moradores del mismo tipo de comunidad, y a menudo también personas de color. Sin lugar a dudas, trabajan con ansiedad, ya que los traficantes fuertemente armados siguen presentando una amenaza, incluso cuando han adoptado un modo más discreto de conducir su negocio, quedándose en los rincones del asentamiento, sin ostentación pública de sus armas. Sin embargo, además de esto, la indebida construcción de este tipo de comunidades como comunidades de ladrones y matones crea un clima que se presta a la violencia. Otro rasgo negativo de las políticas de “pacificación” y la seguridización de la pobreza en general es que reproduce la estigmatización territorial de poblaciones enteras (Wacquant, 2007), tachando a todos los moradores de personas que viven fuera de la ley. Lejos de ser paradójico, el trato netamente racista de los “sospechosos” conforme a una situación bastante inteligible. Los subalternos dentro de una sociedad muy jerarquizada se ven obligados a defender su propio derecho de ser considerados como “personas” dignas de respeto por medio de tachar de “marginales” a “otros” cuyas características sociales son semejantes y estigmatizadas. En el caso de la policía militar brasileña, los integrantes de la corporación pretenden establecer su propia dignidad como representantes del estado, no solamente usando esta identidad para establecer una distancia social entre ellos y los moradores, pese a ser personas que a menudo también son residentes de comunidades semejantes, sino reaccionando con “truculencia” porque “el otro” que paran en la calle no les da el debido “respeto” por protestar en lugar de ser sumiso.

Hasta cierto punto, se puede ver el problema de las relaciones entre policías y moradores como una consecuencia de la cultura de las corporaciones policiacas, cuya militarización es un legado de la dictadura. El modelo tradicional de mantenimiento

de orden “ostensivo” que se dedica a la represión del crimen está muy arraigada en la policía brasileña, en parte porque se reproduce dentro de aquellas familias que se dedican al oficio generación tras generación, una situación que también se presta al mantenimiento de impunidad como consecuencia de los fuertes nexos sociales que se cree en base a estas relaciones. Sin embargo, ya que las corporaciones están cada vez más abiertas a nuevos integrantes, parece necesario pensar en otros mecanismos de reproducción que tienen que ver con las estructuras de mando y jerarquías internas. Un caso interesante, estudiado por Sarah Hautzinger (2007), es el sistema de comisarías de la policía civil creado (a petición de activistas feministas) para atender a mujeres pobres que habían sufrido violencia doméstica. Contando únicamente con personal femenina, el sistema partió de un supuesto esencialista: las oficiales femeninas deben tener más simpatía con las víctimas. Hautzinger demuestra que las policías femeninas querían, para superar los prejuicios de sus colegas masculinas, ser reconocidas como “policías de verdad”, con frecuencia dando un trato altamente violento a los hombres acusados, así reproduciendo la cultura tradicional de represión. Lejos de mostrar simpatía con las víctimas, muchas veces les tacharon de mujeres débiles que no sabían defenderse y que fueron responsables por sus propios problemas. En este caso, las policías eran generalmente más blancas y de capas sociales superiores a las mujeres de los barrios pobres. Sin embargo, el mismo tipo de tendencias de echar la culpa a la víctima se manifestaba entre mujeres dentro del mismo barrio, por parte de mujeres que habían conseguido una capacidad de mantenerse económicamente sin el apoyo de un hombre, y que disfrutaban de sólidas redes sociales o religiosas que les permitían romper relaciones con su marido o compañero sentimental.

Otra replica del discurso de la policía y el discurso de los moradores se encuentra en el caso de tachar a personas de “marginales”. Es común escuchar este tipo de acusaciones contra ciertos vecinos en los barrios pobres, y encontrar a personas a favor de “limpias” del barrio, por cualquier tipo de organización que puede llevar a cabo esta tarea. Por lo tanto, tenemos la paradoja identificada por Teresa Caldeira: el grupo social más castigado por la persecución policiaca y los sesgos del sistema de justicia oficial puede ser a favor de “una policía que mata” (Caldeira,

2002). Por lo tanto, tenemos que atender cuidadosamente, por medio de investigaciones etnográficas, a la subjetividad de todos los actores, ligando su producción a las relaciones de poder que conforman dicha subjetividad. En el caso de la policía, se trata por un lado de sus situaciones sociales, dentro y fuera de la corporación, y por otro lado a las relaciones verticales, también dentro y fuera de la corporación, que determinan sus carreras y ofrecen incentivos a actuar fuera de la ley.

Sin embargo, aunque mis propias investigaciones sugieren que muchos moradores preferían un sistema de justicia oficial que funcionaría por ellos y una policía que les trataría de una manera “civilizada”, conforme a un estado de derecho, la ausencia de estas condiciones puede fortalecer la nostalgia por la alternativa criminal, sobre todo cuando los traficantes trabajan bien sus redes de clientelismo, prestando “ayuda” a proyectos comunitarios e individuos necesitados, consiguen mantener la paz con otras cuadrillas, incluso la policía, y reprimen los robos y asaltos dentro de la comunidad.⁸ Si no se logra implantar una verdadera “policía de proximidad”, ni se prioriza la seguridad de los mismos moradores, dando credibilidad a la sospecha de que la verdadera meta de la política de “pacificación” es tranquilizar a otras clases sociales, estas opciones alternativas podrían volver a ser las opciones preferidas.

El propósito oficial del sistema de UPPs es el de acabar con las tradiciones represivas de mantenimiento del orden por medio de nuevos programas de formación profesional inspirados en modelos japoneses de policía comunitaria. En entrevistas con las policiales femeninas que trabajaban en la primera UPP bahiana, sin lugar a dudas la base que más ha realizado el modelo de policía de proximidad hasta la fecha, encontré bastante críticas de la cultura de la corporación y un alto grado de rechazo de su militarización, además de las quejas normales sobre las deficiencias de las estructuras de carrera ofrecidas por la policía militar. Estas mujeres, todas voluntarias, tenían un perfil social distinto a las mujeres de la policía civil estudiadas por Hautzinger hace más de diez años, en plena crisis económica. Algunas eran residentes

⁸ Una de las quejas de los moradores de la favela de Rocinha en Rio de Janeiro fue que este tipo de delitos aumentó después de la instalación de la UPP (“Assaltos não aconteciam na Rocinha com tráfico, dizem moradores”, <http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/assaltos-nao-aconteciam-na-rocinha-com-trafico-dizem-moradores/n1597410789553.html>, acceso el 9 de enero de 2012).

de barrios pobres, aunque esperaban alcanzar ascenso social por medio de la educación, y todas abogaban de una manera entusiasta por el proyecto de pacificación. El énfasis en la participación de las mujeres en las UPPs otra vez refleja un tipo de “naturalización” del comportamiento de policías femeninas que parece especialmente absurda a la luz no solamente de la abundancia de pruebas que son capaces de altos grados de violencia, sino también por la participación de mujeres en actividades delictivas, a veces en posiciones de mando en las cuadrillas. Sin embargo, hay motivos razonables por pensar que la presencia de mujeres es necesario para crear una policía de proximidad, especialmente cuando se trata de entrar una casa particular donde solamente mujeres y niños están presentes, y sería igualmente absurdo negar que hay bastantes individuos dentro de la policía, mujeres y hombres, que estarían a favor de una reforma policiaca profunda y capaces de practicar otro estilo de mantenimiento del orden público.

Desgraciadamente, en Bahía, la nueva política de seguridad pública no cuenta con suficientes recursos humanos ni económicos para realizar este cambio, y mis informantes en la policía, hombres y mujeres, tenían bastantes críticas de los programas de formación que habían recibido (o no recibido). La base en el Barrio de la Paz fue inaugurado sin la presencia de una sola mujer en sus filas. La meta principal a menudo parece el de conseguir “triumfos” mediáticos en “la guerra contra el narcotráfico” por medio de arrestos de líderes que de pronto serán sustituidos por otros. Las incursiones esporádicas de policías en los barrios solían causar un alto grado de “daños colaterales” en el pasado. La nueva política de implantar bases permanentes no ha eliminado este problema, otra causa de protestas constantes por parte de moradores.

Sin embargo, aunque las nuevas políticas de seguridad pública sean improvisadas, politizadas, y plagiadas por problemas estructurales en un sistema de manutención del orden público que necesita reformas más profundas, tal vez no sean tan “disfuncionales” desde el punto de vista de la reconversión de los asentamientos irregulares en espacios que pueden ser aprovechados por el desarrollo de la ciudad neoliberal. Aun en la ausencia de presiones directos por parte de intereses inmobiliarios para apoderarse de estos terrenos, existen procesos más indirectos que

pueden llevar a la expulsión de moradores más pobres y a la diferenciación social de los que se quedan. En el caso de Rio de Janeiro, la “pacificación” de las favelas bien ubicadas en los cerros con lindas vistas del mar y vecinas a zonas de alto valor inmobiliario, junto con otros aspectos del “choque de orden” que la política pretende imponer por medio de la regularización del suministro del agua y luz, podría llevar a una expulsión de familias más pobres hacia la periferia espacial, todavía sin “pacificación”, más lejos de sus lugares de trabajo y con mayores riesgos ambientales, en base a los mecanismos del mercado. Ya que las familias asentadas en las favelas “consolidadas” han ido mejorando sus casas, y las inversiones públicas han mejorado la infraestructura urbana, las favelas forman parte de los mercados inmobiliarios de la ciudad, aunque los traspasos de derechos a propiedad en su interior sean más “informales”. Los valores tanto de las habitaciones que se ubican en la franja entre “favela” y “asfalto” (las zonas no irregulares de la ciudad), como de las viviendas dentro de las favelas, se ven afectados por los tiroteos entre traficantes y entre traficantes y policías (Cavalcanti, 2014). Si se consigue acabar con este problema, las mismas favelas serían atractivos a nuevos residentes, y de hecho algunas atraían a residentes extranjeras que no compartían los prejuicios sociales de la clase media brasileña aún antes de la pacificación (Handzic, 2010).

Por otro lado, la política de “pacificación” todavía suena de tradiciones autoritarias y paternalistas que podrían llevar a otras formas de discriminación y diferenciación social. Se imponen toques de queda en los bares populares, pero en Rio de Janeiro empresas ajenas han sido permitidas a organizar fiestas privadas para que los “playboys” de la clase-media-alta disfruten de los atractivos de estos lugares que no son suyos (Gombata, 2013). Los moradores que tienen que salir temprano para ir a su trabajo ya ni duermen bien por el ruido. En el caso de Salvador, se trata más de liberar los espacios ocupados por las clases populares para construir condominios, pero se aplica la misma política autoritaria de reprimir las fiestas y música populares de los barrios. Esta política también ha aumentado las tensiones en el Barrio de la Paz, ya que a veces la policía se ha comprometido permitir una fiesta en cambio de una propina, pero no cumple su palabra.

Todo esto es consecuencia del aumento de la estigmatización territorial que es la cara oscura de la seguridad de desigualdades sociales. De verdad, no se puede entregar la “ciudadanía” desde arriba. Es necesario otorgar a las personas menos acomodadas el respeto que están reclamando en un ambiente de promesas de acabar con la discriminación racial y la “racialización de clase”. A la luz de su sentido de ser cada vez vulnerables al despojo o remoción, junto con los problemas cotidianos de crimen y violencia que las UPPs no han resuelto, los moradores se sienten más inseguros que nunca.

La “pacificación” de Michoacán

Una justificación de las UPPs es que es necesario acabar con la “ausencia” del estado en ciertos espacios sociales. Ya hemos revisado las críticas de esta forma de definir el problema ofrecidas por Michel Misse y Enrique Desmond Arias. En términos más generales, me parece recomendable redefinir el problema de seguridad desde una perspectiva popular de la manera en que lo hace Daniel Goldstein (2012) por el caso de Bolivia: el problema no es la *ausencia* del estado sino *la forma fantasma* en que ha sido *presente* en la vida comunitaria, por medio de incursiones esporádicas marcadas por la violencia y corrupción de sus agentes. Esta observación me lleva a México, donde no se debe olvidarse, a la luz del surgimiento de las mafias criminales posterior a la transformación neoliberal del país, de las prácticas de extorsión que caracterizaban el antiguo régimen del PRI. Esta observación es relevante tanto a la vida sindical corporativista y la historia de la prefería urbana de las ciudades metropolitanas, como a la vida rural de regiones como Guerrero (Bartra, 1996), donde la reproducción a largo plazo del poder arbitrario de cacicazgos, aunque ya sean “modernizados”, siempre promovía un saqueo de la economía campesina cuyas huellas todavía están presentes en las situaciones que existen hoy en día.

En este apartado, voy a seguir con el tema de la “pacificación” con una discusión del caso específico de Michoacán, donde la cuestión de la seguridad pública se complicó por el surgimiento de las autodefensas. El problema inicial en plantear el problema también existe en Brasil desde el punto de vista de las clases populares: la falta de una distinción clara entre un estado “delincuente” y los actores criminales

(Soares, 2006; Gaio, 2006). En el caso mexicano, ya ha dejado de ser pura especulación o cosa de telenovelas plantear que no solamente el estado nacional, y importantísimos elementos de la clase política, sino también la CIA estadounidense desempeñaron un papel clave en el desarrollo del narcotráfico (Hernández, 2012). Altos funcionarios de las agencias encargadas con la manutención de la seguridad nacional han sido actores claves en este proceso. Dentro de este escenario histórico complicado, se puede detectar momentos en que el narcotráfico fungía de aliado del estado, en las campañas contrainsurgentes en Guerrero, por ejemplo. Sin embargo, este lado oscuro de la historia mexicana ya ha producido una condición de fragmentación, desorden y violencia que ha llevado últimamente al planteamiento de la situación que existe en Michoacán como “una amenaza a la seguridad nacional”. Para entender como se produjo este “desorden”, y para criticar la forma en que el discurso oficial ha diagnosticado el problema en términos de seguridad, estoy con Salvador Maldonado (2012: 7) cuando insiste que debemos rechazar cualquier modelo del antiguo régimen priísta como la “dictadura perfecta” y del estado mexicano como un pirámide de poder centralizado, y entender los perfiles recientes de la violencia social y del narcotráfico en términos del impacto de las transformaciones neoliberales, tanto políticas como económicas, sobre regiones en donde siempre existían problemas de “gobernabilidad”. En el contexto de la reestructuración neoliberal mexicana, se ve la misma relación entre el crecimiento de mercados ilegales y criminales⁹ y el tráfico de “mercaderías políticas” que se dio en Brasil durante los años de crisis y transformación neoliberal, pero, como señala Maldonado, con dimensiones regionales específicas que necesitan una perspectiva histórica más completa, una perspectiva que también es relevante para entender el desarrollo de las autodefensas michoacanas.

⁹ Como Rebecca Galemba ha señalado, en el caso de los movimientos “ilegales” de mercancías entre México y Guatemala, que puede ser útil distinguir entre la economía criminal, por un lado, y la parte de la economía “ilegal” que la población en general considere una solución “legítima” a sus problemas de reproducción social dentro del marco de una sociedad de mercado neoliberalizada en que el estado “no ayuda”, por otro lado (Galemba 2012). Sin embargo, la misma autora identifica varios procesos sociales y económicos que militan en contra de una separación total del tráfico transfronterizo de estupefacientes (clasificado como “ilícito” por la población local) y las formas de contrabando considerados legítimas (y en general toleradas por el aparato del estado).

Maldonado resume la aportación general de su análisis detallada de los procesos que “detonaron” el auge de narcotráfico y violencia en la tierra caliente y costa de Michoacán en los siguientes términos:

... la fortaleza de los cárteles se ha construido por una multiplicidad de factores geográficos, históricos y culturales que tienen que ver tanto con la descomposición del régimen priísta como con el desmantelamiento del Estado y la desregulación económica y política, objetivadas en el crecimiento del consumo de drogas, la restricción migratoria, la falta de oportunidades y la expansión de mercados ilícitos, económicos y políticos (corrupción). Los cárteles michoacanos son una síntesis de identidades históricas que traspasan cualquier forma mecánica de presencia o ausencia del Estado. Su estructura responde a estos tejidos identitarios y culturas íntimas de grupos sociales, por lo que difícilmente podrán erradicarse por medio de campañas de militarización. La fetichización de los territorios considerados violentos que el gobierno federal utilizó para justificar la guerra contra el narcotráfico se ha constituido en un problema real para las poblaciones locales. (Maldonado, 2012: 30)

Mis propios datos etnográficos confirman que los efectos de las operaciones llevadas a cabo en Michoacán por fuerzas federales durante la administración de Felipe Calderón provocaron un alto grado de rechazo por parte de la población. El modo de interacción entre las fuerzas federales y la población compartió muchas de las características negativas de las pacificaciones de favelas brasileñas, pero sin la más mínima contraparte en términos de programas de desarrollo social eficaces ni creación de empleos. Irónicamente, se podría detectar más del uso eficaz la mano izquierda del estado en las operaciones contrainsurgentes en Chiapas (Bartra, 2011), aunque gran parte de los programas de desarrollo administrados por el gobernador Juan Sabines, sobre todo las llamadas “ciudades rurales sustentables”, podrían ser vistos como simulaciones, ya que dependían económicamente de subsidios del gobierno del estado. La administración de Enrique Peña Nieto ya pretende ligar la “pacificación”

de Michoacán a nuevos programas de desarrollo, pero dejando a un lado el tipo de problemas que acabé de mencionar, dicha estrategia se conforma directamente a lo que ya podemos ver como una estrategia global, en base a un nexo entre “seguridad” y “desarrollo” (Duffield, 2010).

Aunque dicha estrategia remonta a la época de la Guerra Fría, Duffield interpreta su forma actual como un intento de estabilizar una división biopolítica del mundo (entre regiones y entre el Norte global y el Sur global) en que distintos segmentos de la población pueden seguir disfrutando estilos de vida muy diferentes. El modelo pretende devolver a las masas que no han beneficiado del crecimiento económico durante la época neoliberal una capacidad de auto-sostenerse en sus lugares de origen, una capacidad que el modelo neoliberal minó no solamente por la reestructuración económica, en términos de las transformaciones de mercados de trabajo y el retiro de subsidios de la economía campesina, sino también indirectamente por el impacto de crisis y austeridad sobre las relaciones de ayuda mutua que sustituía al estado de bienestar estilo europeo, y la contracción del alcance de las relaciones verticales de patronazgo que existían durante la época de estados patrimoniales o desarrollistas. El problema general con este proyecto es que la participación en economías ilegales ofrece mucho más a los “desechables” del modelo de acumulación neoliberal que las limosnas ofrecidas por los programas nacionales e internacionales que se dirigen principalmente a la reducción de la pobreza extrema, y que otros actores pueden llenar los espacios de patronazgo que el estado neoliberal deja vacíos. Esta posibilidad aumenta en la medida en que el modelo de desarrollo dominante sigue profundizando la desigualdad social y promueve los procesos que David Harvey (2007) llama “la acumulación por desposesión”, tanto en contextos urbanos como contextos rurales.

En Michoacán el crimen organizado consiguió llenar espacios vacíos y convertirse en un “poder paralelo”, pero aún más en este contexto que en el contexto brasileño, se trata de un poder paralelo que logró constituirse por medio de construir una amplia y profunda red de vínculos con políticos, la cual al final dio a los Caballeros Templarios más voz y voto en lo que se refiere a la selección de sus autoridades que los demás ciudadanos. Proyectándose al principio como “defensores

del pueblo michoacano”, el crimen organizado pudo aprovecharse de la desconformidad de una amplia gama de ciudadanos con el papel del gobierno federal. Incluso las consecuencias locales de su “guerra contra el narcotráfico”, así convirtiéndose en una verdadera mafia, ligada a distintos “pedazos” de un estado fragmentado, para usar la terminología que Jane y Peter Schneider (2003) han usado para describir la situación siciliana. En este tipo de situaciones, empresas privadas pueden entrar el escenario también, no solamente como blancos de extorsión, sino también como contratistas de servicios para trabajos sucios, igual que en Brasil. Sin embargo, la situación mexicana es más compleja, debido al número de distintos poderes privados que sean capaces de “capturar” los distintos “pedazos” del estado. En la costa michoacana, los intereses involucrados siguieron multiplicándose, ya que el negocio no era simplemente las drogas ni la extorsión, sino también otras actividades de alta rentabilidad como la minería ilegal, y las enlaces económicas relevantes al negocio no eran simplemente las con los Estados Unidos, Centroamérica y Colombia, sino también las con China.¹⁰

El surgimiento de las autodefensas complica el escenario aun más, ya que las bases sociales de dichos movimientos son distintas. Algunas autodefensas tienen raíces históricas en sistemas indígenas de policías comunitarias, incluso la primera a establecerse, en la comunidad nahua de Ostula en la costa, aliada con Cherán en la meseta purhépecha. Producto de un enfrentamiento sobre un terreno usurpado con la comunidad mestiza de La Placita, base del principal operador del narcotráfico en la región, la autodefensa de Ostula fue desarmada por la marina en 2010 con consecuencias sanguinarias (Gledhill, 2013). Otras autodefensas tiene precedentes históricas en las defensas rurales de la época agrarista, una figura por medio de la cual algunos de los actores esperan conseguir el reconocimiento oficial, como el gobierno del estado perredista propuso en el caso de la policía comunitaria de Ostula, aunque no cumplió su palabra. Algunas autodefensas son patrocinadas por ganaderos y agricultores comerciales, permitiéndoles pagar sueldos, otras empezaron como movimientos de ciudadanos comunes y corrientes hartos de pagar a la mafia, usando

¹⁰ No abundaré mucho más sobre este tema aquí, ya que ofrezco más detalles en otra publicación en castellano (Gledhill, 2013).

escopetas en lugar de las armas más sofisticadas que algunas de estos grupos ostentaban desde sus principios, y otras son integradas por personas que andaban al lado de los Templarios antes de ver mejores oportunidades en un cambio de bandera una vez que el gobierno federal empezó su nuevo operativo en 2013. Dentro de este panorama complicado, la dinámica de las relaciones entre los actores distintos pueden llevar a una variedad de consecuencias. Las autodefensas pueden ser vehículos para la intensificación de luchas faccionales dentro de su localidad. Pueden recurrir a la coacción dentro de las comunidades locales para avanzar su causa, de la misma manera que el crimen organizado. Pueden ser penetrados por el crimen organizado aun cuando estén enfrentándose al grupo criminal que detiene el poder en su localidad. Aún cuando empiezan como grupos de ciudadanos desesperados que se han levantado en armas para defender a sus familias y sus bienes, pueden convertirse en otro tipo de organización con el tiempo, como ya sabemos a la luz de la experiencia de las rondas campesinas peruanas (Starn, 1999).

Una vez que el gobierno federal se había aprovechado de la inteligencia local ofrecida por las autodefensas y del apoyo que al menos parte de la población ha otorgado a sus actividades, anunció, en abril de 2014, que había llegado el momento de desarme, un proceso que todavía no se ha llevado a cabo en el momento de cerrar este artículo. Podría ser bastante complicado desmovilizar algunos de estos grupos, y si el estado decide legalizar algunos, esperamos que no sean los que parecen en vías de convertirse en nuevas mafias. Es obvio en base a las peleas que han ocurrido dentro del “movimiento” de autodefensas en la tierra caliente hasta la fecha, junto con la variedad de actores que están metidos a este escenario, que la observación de Maldonado sobre la importancia de ser atentos a “los tejidos identitarios y culturas íntimas de grupos sociales” sigue siendo sumamente relevante.

Lo que es menos obvio es cómo el gobierno federal pudiera establecer un verdadero estado de derecho, aún suponiendo que la violencia actual “limpiara” el estado de Michoacán de los Templarios, ya que un verdadero estado de derecho nunca ha existido en la entidad. Además, el papel del estado federal en Michoacán era bastante cuestionable durante el periodo en que los carteles establecieron su influencia en la vida política de la región. Para dar sólo un ejemplo, en el caso de la costa no

solamente es necesario entender como el trato ilegal de minerales a gran escala podría haber funcionado bajo la vigilancia de fuerzas federales, sino también es interesante pensar en una posible conexión entre los intereses de la empresa minera italo-argentina Ternium, el hostigamiento de la comunidad indígena de Ostula, y el desarme de la primera autodefensa que surgió en la cabecera municipal de Aquila, cuyos integrantes fueron encarcelados, otra vez por fuerzas federales, un episodio más en una larga historia de intervenciones federales en las peleas locales sobre el pago de regalías a la comunidad indígena de Aquila. El estado federal nunca ha sido totalmente “ausente” en esta zona, donde hay un afán oficial para desarrollar proyectos turísticos, construir una nueva carretera costera, y Ternium tiene interés tanto en establecer un puerto de granel como en extender sus operaciones mineras dentro de los territorios de las comunidades indígenas que hasta la fecha han rechazado estos proyectos.

En febrero de 2014, la policía comunitaria de Ostula fue reconstituida bajo el liderazgo de un grupo de jóvenes que fue exiliado durante la época de violencia y asesinatos que aconteció después del desarme de 2010, apoyado por la autodefensa reconstituida de Aquila y las autodefensas de los municipios mestizos vecinos de Coalcomán y Chincuilá. Las autodefensas entraron a La Placita, aunque ya se había retirado el grupo de Templarios encabezado por “Lico” González, un personaje bastante popular en su comunidad de origen por las “ayudas” que ofrecía como patrón de sus paisanos. Aunque los nuevos líderes de la policía comunal de Ostula conseguirán evitar otro intento de desarme por parte de los militares en esta ocasión, las consecuencias de su dependencia actual del respaldo de autodefensas mestizas podrían presentar dificultades en el futuro, una vez que la cuestión del futuro desarrollo económico de la región, y sobre todo, el peso del neo-extractivismo en este proceso de desarrollo, vuelven a ser prioritarios por los diversos intereses que codician los recursos todavía no transformables en mercancías por estar dentro de territorios indígenas.

Conclusiones

Con el tema del neo-extractivismo, llegamos al papel de la “acumulación por desposesión” en el nexo contemporáneo entre seguridad y desarrollo, y uno de los ejes rectores del modelo actual de desarrollo en toda América Latina. La minería y los megaproyectos hidráulicos y energéticos son sectores favorecidos por gobiernos de distintas orientaciones ideológicas y políticas en toda la región (Bebbington, 2009). En nombre de los intereses nacionales y el financiamiento de programas sociales que pretenden reducir la pobreza, el gobierno de Brasil ha defendido la necesidad de construir la presa de Belo Monte en medio de la reserva del parque nacional del Xingu, descartando su impacto catastrófico sobre las poblaciones indígenas cuya protección fue el motivo original para crear dicha reserva.

A pesar del hecho de que se puede distinguir los impactos de las políticas económicas brasileñas y mexicanas durante los últimos diez años de una manera que favorece a Brasil, en términos del impacto de programas sociales sobre la desigualdad, el perfil de los salarios reales, la creación de nuevos empleos, y la reducción de la informalidad y extensión de beneficios sociales y protección a los trabajadores, en esta materia no existen grandes diferencias, aparte del hecho de que los indígenas brasileños son pocos y los mexicanos todavía muchos. Sin embargo, el neoextractivismo no solamente tiene impactos sobre indígenas en México, como demuestra el conflicto violento entre la compañía canadiense Blackfire y los residentes de Chicomuselo en Chiapas, que resultó en el asesinato, todavía no aclarado, del líder principal del movimiento en contra de la mina. Además, la acumulación por desposesión ha sido un proceso visto con cada vez más frecuencia en la periferia urbana de Brasil en los últimos años. No se trata solamente de desalojamiento relacionados con los megaeventos deportivos, sino también de un número importante de remociones forzadas ligadas a decisiones jurídicas de devolver terrenos y edificios “invadidos” por familias pobres a sus dueños.

Un ejemplo típico de este último tipo de desalojamiento fue la evicción en enero de 2012 de los 6000 moradores del asentamiento de Pinheirinho en el estado de São Paulo, para entregar el terreno al especulador financiero e inmobiliario de origen libanes, el Sr. Naji Nahas. Atacados sin aviso previo por dos mil policías antimotines

armadas, los moradores no fueron permitidos ni rescatar sus pertenencias personales sino tuvieron que correr con sus niños y ancianos mientras que sus casas fueron destruidas. La minoría que intentó resistir fue duramente reprimida. Este tipo de trabajo en defensa de los derechos patrimoniales de los poderosos e influyentes es uno de los motivos por mantener una policía militar “dura”, capaz de reprimir, aunque la extensión de esta actitud “dura” a la represión de las manifestaciones de jóvenes, en su mayoría integrantes de la clase media, contra los gastos de la Copa Mundial en 2013 mostró el aspecto menos conveniente de esta tradición.¹¹ Sin embargo, a pesar de su barbaridad, se hace el tipo de remociones que se hizo en Pinheirinho dentro del marco de la ley, aunque sea una ley sesgada por intereses de clase. Es otra cosa cuando se trata de las actividades de fuerzas paramilitares o cuerpos de seguridad clandestinos.

Desde el punto de vista del estado, como demuestra la amarga experiencia de Chiapas, las actividades de grupos paramilitares tienen la gran ventaja de ser una forma de violencia “negable”. Sin embargo, la violencia paramilitar puede producir un alto número de desplazados. Además aquí encontramos una zona de ambigüedad entre la violencia del crimen organizado y la violencia paramilitar. Los que trabajan como sicarios por los carteles mexicanos pueden desempeñar múltiples funciones, a favor de múltiples intereses. La frontera entre la economía legal y la economía ilegal deja de ser tan clara en contextos donde existe ningún estado de derecho y una impunidad absoluta, garantizada por las acciones o falta de acciones de las autoridades políticas, jurídicas y hasta militares. Son estas “zonas grises” que hace la idea de que la inseguridad es una consecuencia de la simple “ausencia” del estado tan difícil de mantener.

En esta discusión, he destacado en repetidas ocasiones que estrategias netamente represivas por parte del estado pueden tener efectos contradictorios, en

¹¹ Durante estas manifestaciones, varios elementos opuestos al gobierno petista provocaron actos de violencia y vandalismo, incluso, al parecer, policías disfrazados. Respondiendo a críticas de su conducta represiva durante las manifestaciones, y una crítica por parte de un coronel jubilado por tratar a la población de la periferia urbana como un potencial enemigo, como si fuera todavía la época de la dictadura, la Policía Militar de São Paulo emitió un comunicado oficial acusando a los que abogan por la desmilitarización de la corporación de ser seguidores de “la ideología anacrónica de Antonio Gramsci”, resueltos a minar “estructuras básicas y sólidas de formación moral, como familia, escuela y religión”, así reproduciendo precisamente el lenguaje típico de la dictadura (Lima, 2014).

términos de los objetivos oficiales del despliegue de violencia oficial. Sin embargo, sigue siendo necesario pensar en la posibilidad de que los objetivos oficiales no sean los objetivos reales de estos operativos.

Una posibilidad, bien fundada en la experiencia michoacana y guerrerense, sin hablar de los recientes acontecimientos en Guatemala, es que los blancos principales de las operaciones de las fuerzas de seguridad oficiales no son organizaciones criminales sino movimientos sociales que amenazan el desarrollo de megaproyectos turísticos, energéticos y mineros, los cuales son criminalizados por ser declarados una amenaza a la seguridad pública. Las autodefensas que tienen, o tal vez más adelante vayan a mostrar, cara de paramilitares colombianos o milicias brasileñas podrían presentarse como otra dimensión de este problema. En este sentido, se puede ver un número de convergencias entre Brasil y México en lo que se refiere al ampliado sentido de *inseguridad* provocado por las operaciones del aparato de seguridad oficial, o sea por comisión o omisión. No quiero exagerar el paralelismo, sobre todo porque hay grandes diferencias entre las organizaciones criminales en los dos países y en lo que se refiere al nivel de penetración de las instituciones del estado por dichas organizaciones. Sin embargo, en los dos casos la securidización sirve como herramienta para construir territorios de intervención, producir poblaciones de “sospechosos”, y justificar un alto grado de autoritarismo por parte de los administradores del orden público. Además, en el ambiente económico dominante, los aparentes “fracasos” de la seguridad pública tal vez no sean puros fracasos desde el punto de vista de los intereses que logran capturar o neutralizar el poder público para fines privados. Como demuestra el caso de Colombia, cuando hay fuertes intereses económicos en juego, no es nada fácil poner fin a la violencia paramilitar aun cuando el estado se muestra más dispuesto a negociar la paz que la mayoría de la población reclama. Sin embargo, en términos de las consecuencias de la securidización, estamos hablando de fracturas profundas en la fabrica social cuyas séquelas pueden ser duraderas, ya que se manifiestan en una desvaloración de la vida humana y un sinnúmero de otros tipos de violencia en la vida cotidiana, además de la conservación de estructuras de poder y situaciones de injusticia social que suelen provocar ciclos de violencia pese al recurso a la represión.

Bibliografía

Arias, Enrique Desmond (2006) “The dynamics of criminal governance: networks and social order in Rio de Janeiro”, en *Journal of Latin American Studies*, vol. 38, núm.:2, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 293-325.

Bartra, Armando (1996) *Guerrero bronco: campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande*, Ediciones Era, México, D.F.

Bartra Armando (2007) “Los municipios incómodos”, en Xochitl Leyva Solano y Aracely Burguete Cal y Mayor (coords.) *La remunicipalización de Chiapas: lo político y la política en tiempos de contrainsurgencia*, pp. 329-343. H. Cámara de diputados, LX Legislatura, CIESAS, y Miguel Ángel Porrúa, México, D.F.

Batista, Vera Malaguti (coord.) (2012) *Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal*, Editora Revan, Rio de Janeiro.

Bebbington Anthony (2009) “The new extraction: rewriting the political ecology of the Andes”, en *NACLA Report on the Americas*, vol. 42, núm. 5, North American Congress on Latin America, Washington, pp. 12-20.

Caldeira, Teresa P.R. (2002) “The paradox of police violence in democratic Brazil”, en *Ethnography* vol. 3, núm. 3, Sage Publications, Londres, pp. 235-63.

Cavalcanti, Mariana (2014) “Value between the ‘favela’ and the ‘pavement’”, en Brodwyn Fischer, Bryan McCann y Javier Auyero (coords.) *Cities from Scratch: Poverty and Informality in Urban Latin America*, pp. 208-237, Duke University Press, Durham y Londres.

Da Costa, Marcelo Henrique y Sérgio Ricardo Rodrigues Castilho (2011) “Desenvolvimento econômico solidário e segurança pública na cidade do Rio de

Janeiro: estratégias para a ação”, en *Mercado de Trabalho* núm. 46, IPEA, Brasília, pp. 57-61.

Duffield, Mark (2010) “The liberal way of development and the development—security impasse: exploring the global life-chance divide”, *Security Dialogue*, vol. 41, núm. 1, Sage Publications, Londres, pp. 53-76.

Feltran, Gabriel de Santis (2010) “Crime e castigo na cidade: os repertórios da justiça e a questão do homicídio nas periferias de São Paulo”, en *Caderno CRH*, vol. 23, num. 58, Universidade Federal da Bahia, Salvador, pp. 59-73.

Gaio, André Moysés (2006) “O estado delinqüente: uma nova modalidade de crime?” en *Cadernos de Ciências Humanas - Especiaria*, vol. 9, núm. 15, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, pp. 137-157

Galemba, Rebecca (2012) “Taking contraband seriously: practicing ‘legitimate work’ at the Mexico-Guatemala border”, en *Anthropology of Work Review* vol. 33, núm. 1, Wiley-Blackwell, Hoboken, pp. 3-14.

Gledhill, John (2013) “Límites de la autonomía y autodefensa indígena: experiencias mexicanas”, en *Oxímora: revista Internacional de Ética y Política*, núm. 2, Universidad de Barcelona, Barcelona, pp. 1-21, <http://revistes.ub.edu/index.php/oximora/article/view/6291>, acceso 13 de abril de 2014.

Goldstein, Daniel M. (2012) *Outlawed: between Security and Rights in a Bolivian City*, Duke University Press, Durham y Londres.

Gombata, Maríselea (2013) “O asfalto invade a morro: com a pacificação das favelas, o baile funk dá lugar às baladas de jovens da zona sul carioca”, en *Carta Capital*, núm. 736, 20 de febrero de 2013 (edición electrónica, sin números de página).

Handzic, Kenan (2010) “Is Legalized Land Tenure Necessary in Slum Upgrading? Learning from Rio's Land Tenure Policies in the Favela-Bairro Program”, en *Habitat International*, vol. 34, núm. 1, Elsevier, Amsterdam, pp. 11-17.

Harvey, David (2007) “Neoliberalism as Creative Destruction”, en *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 610, núm. 1, Sage Publications, Los Angeles, pp. 21-44.

Hautzinger, Sarah J. (2007) *Violence in the City of Women: Police and Batterers in Bahia, Brazil*, University of California Press, Berkeley.

Hernández, Anabel (2012) *Los señores del narco*, Grijalbo, México, D.F.

Hita, Maria Gabriela, y John Ernest Gledhill (2010) “Antropologia na análise de situações periféricas urbanas”, en *Cadernos Metrópole*, vol. 12, núm. 23, Observatório das Metrópoles, São Paulo, pp. 189-209.

Leblon, Saul (2012) “O banguê-banguê paulista: a cidade quer saber”, *Carta Maior*, http://www.cartamaior.com.br/templates/postMostrar.cfm?blog_id=6&post_id=1130, acceso el 6 de noviembre de 2012.

Lima, José Antonio (2014) “A PM-SP revela sua ideologia em nota oficial”, <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-pm-sp-revela-sua-ideologia-3626.html>, acceso 13 de abril, 2014.

Machado, Eduardo Paes, y Ceci Vilar Noronha (2002) “A polícia dos pobres: violência policial em classes populares urbanas”, en *Sociologias* vol. 4, núm. 7, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pp. 188-221.

Maldonado Aranda, Salvador (2012) “Drogas, violencia y militarización en el México rural: El caso de Michoacán”, en *Revista Mexicana de Sociología* vol. 74, núm. 1, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., pp. 5-39.

Misse, Michel (1997) “As ligações perigosas: mercado informal ilegal, narcotráfico e violência no Rio”, en *Contemporaneidade e Educação*, vol. 2, núm. 1, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, pp. 93-116.

Misse, Michel (2011) “La acumulación social de la violencia en Río de Janeiro y en Brasil: algunas reflexiones”, en *Co-herencia*, vol. 7, núm. 13, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, pp. 19-40.

Noronha, Ceci Vilar (2008) “Criminalidad urbana y acciones de los escuadrones de la muerte en la Bahía (Brasil): de la impunidad a la pena maxima”, en *Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, núm. 4, FLACSO-Sede Ecuador, Quito, pp. 103-110.

Perlman, Janice (2004) “The Metamorphosis of Marginality in Rio De Janeiro”, en *Latin American Research Review*, vol. 39, núm. 1, Latin American Studies Association, Pittsburgh, pp. 189-192.

Ribeiro Delgado, Fernando, Raquel Elias Dodge y Sandra Carvalho (2011) *São Paulo sob ataque: corrupção, crime organizado e violência institucional em maio de 2006*, <http://global.org.br/programas/sao-paulo-sob-achaque-corrupcao-crime-organizado-e-violencia-institucional-em-maio-de-2006/>, acceso el 18 de marzo de 2012.

Sheriff, Robin E. (1999) “The theft of carnival: national spectacle and racial politics in Rio de Janeiro”, en *Cultural Anthropology*, vol. 14, núm. 1, Wiley-Blackwell, Hoboken, pp. 3-28.

Smith, Neil (2002) “New globalism, new urbanism: gentrification as global urban strategy”, en *Antipode*, vol. 34, num. 3, Wiley-Blackwell, Hoboken, pp. 427-50.

Schneider, Jane, and Peter T. Schneider (2003) *Reversible Destiny: Mafia, Antimafia, and the Struggle for Palermo*, University of California Press, Berkeley.

Soares, Luiz Eduardo (2006) “Segurança pública: presente e futuro”, en *Estudos Avançados*, vol. 20, núm. 56, Instituto de Estudos Avançados, São Paulo, pp. 91-106.

Starn, Orin (1999) *Nightwatch : the Making of a Movement in the Peruvian Andes*, Duke University Press, Durham y Londres.

Stephen, Lynn (1999) “The Construction of Indigenous Suspects: Militarization and the Gendered and Ethnic Dynamics of Human Rights Abuses in Southern Mexico”, en *American Ethnologist*, vol. 26, núm. 4, Wiley-Blackwell, Hoboken, pp. 822-42.

Veira da Cunha, Neiva (2012) “Vivienda popular y seguridad pública: el proceso de pacificación en las favelas de Río de Janeiro”, en Jaime Erazo (coord.) *Dimensiones de habitat popular latinoamericano*, FLACSO-Sede Ecuador, Quito, pp. 143-162.

Zaluar, Alba, y Isabel Siqueira Conceição (2007) “Favelas sob o controle das milícias no Rio de Janeiro”, en *São Paulo em Perspectiva*, vol. 21, núm. 2, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, São Paulo, pp. 89-101.

Wacquant, Loïc (2007) “Territorial stigmatization in the age of advanced marginality”, en *Thesis Eleven* núm. 91, Sage Publications, Los Angeles, pp. 66-77.

Wacquant, Loïc (2009) *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity*, Duke University Press, Durham y Londres.